



Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social

Associação Latinoamericana de Ensino e Pesquisa em Serviço Social



Pronunciamento # 48

**Radicalizar la paz y la democracia:
alternativa ante la muerte y la injusticia**

Con horror e indignación, en las últimas semanas hemos tomado nota sobre la ampliación de la espiral de violencia y muerte que afecta a la sociedad colombiana, en esta oportunidad ensañándose contra adolescentes en diferentes partes de su geografía.

“Existen “líderes” que se destacan por su conocimiento en “explosivos improvisados y número de actos vandálicos y experiencias a las cuales hayan participado”.”

EL TRABAJO SOCIAL Y LO COMUNITARIO NO ES TERRORISMO

Mi trabajo es social, subo a territorio y no soy unx terrorista, exigimos al Periódico El Tiempo que rectifique lo dicho en su artículo “Así operan y se organizan grupos radicales y de vándalos en Bogotá”

Los jefes de estas redes, además, se desplazan a los barrios periféricos de Bogotá y Soacha para realizar “trabajo social y comunitario”, y así lograr nuevos adeptos

Según el documento, “los procesos de judicialización e investigación por parte de las autoridades en Colombia reflejan cerca de 20 grandes grupos radicales situados en la capital, los cuales en su mayoría están integrados por estudiantes universitarios, así como menores de edad provenientes de la secundaria”.

#TrabajoComunitarioNoEsTerrorismo
#MiTrabajoEsSocialNoTerrorismo
#TrabajoPopularNoEsCriminal

TWITTERATON, A LAS 12:00PM RECHAZAMOS LA ESTIGMATIZACIÓN A LXS JÓVENES QUE REALIZAN TRABAJO SOCIAL Y/O COMUNITARIO!

Entre el 11 y el 15 de agosto de este año, fueron asesinados 13 adolescentes en Cali y Nariño, dándole un giro aún más perverso al estado de violencia que vive el país, y sumiendo a la sociedad colombiana en una situación de vulnerabilidad social que no es nueva, pues según un informe de Forensis de Medicina Legal, sólo para el año 2018 “710 menores de edad entre cero y 17 años fueron asesinados. En promedio, dos diarios. El rango con más casos es el comprendido entre 15 y 17 años, con 545 casos”.

A estos viles asesinatos, se suman los 971 asesinatos de líderes y activistas sociales desde los acuerdos de paz (del 24/11/2016 al 15/07/2020) que han sido registrados en el informe especial emitido por Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) el 15 de julio de 2020; dejando en evidencia la

existencia de sectores políticos, militares, paramilitares, redes de narcotráfico y de

la delincuencia organizada, a quienes les beneficia ese clima de violencia, muerte e impunidad que se ha extendido por todo el país.

Se vislumbra así, el perverso círculo de violencia al que ha sido sometido el pueblo colombiano durante las últimas décadas y que en tiempos recientes nos ha golpeado directamente como colectivo profesional:

- El 30 de octubre de 2019 fue asesinada Cristina Bautista, Gobernadora indígena y trabajadora social egresada de la Universidad del Valle.
- El pasado 1 de setiembre, fue asesinado en Putumayo, el trabajador social y líder social Franklin Velázquez, quien era integrante de Red Unidos y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
- El 10 de setiembre fue asesinada en Popayán, Emily Conejo, estudiante de Trabajo Social e hija del líder indígena Oliverio Conejo quien fue coordinador de salud del Resguardo Indígena de Totoró (quien también fue asesinado).

Las manifestaciones sociales que se dieron en Bogotá y otras ciudades colombianas luego del asesinato de Javier Ordóñez (09-09-2020) a manos de la policía colombiana, derivaron no solo en la movilización de miles de personas contra la violencia policial, sino en nuevas acciones de represión por parte del gobierno, las que se saldaron con más de una decena de personas asesinadas y cientos de personas detenidas y heridas.

En ese dramático contexto, un infortunado reportaje del diario **El Tiempo** titulado “Así operan y se organizan grupos radicales y de vándalos en Bogotá”, plantea a partir de información de los órganos de inteligencia colombiana, que “Los jefes de estas redes, además, se desplazan a los barrios periféricos de Bogotá y Soacha para realizar “trabajo social y comunitario”, y así lograr nuevos adeptos.”; lo que coloca a nuestra profesión en un alto grado de vulnerabilidad, y la constituye en objetivo de exterminio por parte de los grupos responsables de esta barbarie.

Asociar a la profesión con actos terroristas es una afrenta de las agencias de inteligencia y del citado diario, y supone un grosero desconocimiento del cercano centenario del Trabajo Social en América Latina. Afirmaciones temerarias de esa naturaleza vienen no solo a invisibilizar la compleja trama política del país, sino que obstaculizan las posibilidades de diálogo social y criminalizan las diferentes expresiones de organización y participación social.

Como Asociación Latinoamericana de Enseñanza en Investigación en Trabajo Social:

- Condenamos las sistemáticas prácticas de amenaza y exterminio que afectan a miles de personas en nuestro país hermano Colombia y en particular a quienes asumen roles de liderazgo social a lo largo y ancho del país.
- Nos solidarizamos con las familias y amistades de Cristina Bautista, Franklin Velázquez y Emily Conejo, así como con el colectivo profesional del Trabajo Social que se encuentra de luto por estos asesinatos.
- Respaldamos las declaraciones de diferentes colectivos académicos y profesionales del Trabajo Social colombiano, que en días recientes han

denunciado valientemente los contenidos, omisiones e imprecisiones publicados por el diario **El Tiempo** en alusión al “trabajo social y comunitario”, y que lamentablemente, se constituyen en un disparador que podría aumentar la escalada de violencia contra estudiantes y profesionales de nuestra categoría, al ser mal considerados como “grupos radicales”.

- Externamos nuestra preocupación por asociar de manera inexacta y tendenciosa a los centros formación como puntos de encuentro y entrenamiento, lo que invisibiliza y tergiversa el papel de las universidades en los procesos de formación académica y análisis crítico de la realidad social.
- Denunciamos la recurrente práctica de criminalización del movimiento social que asume el Estado colombiano y otros operadores políticos afines, desconociendo así los procesos de defensa de los derechos humanos de las poblaciones y sectores sociales más vulnerados.
- Le recordamos a los medios de comunicación, en particular al diario **El Tiempo**, la gravedad de realizar publicaciones con acusaciones que no se ajustan a la realidad, que la distorsionan o que caen en el amarillismo informativo, y que a la postre sólo contribuyen a profundizar el clima de violencia.
- Urgimos al Estado colombiano no solo a esclarecer los asesinatos y atentados que se han cometido contra los liderazgos sociales y otros grupos sociales, sino también a condenar a los autores intelectuales y materiales de estos infames crímenes.
- Instamos al Estado colombiano a establecer de una vez por todas un real compromiso con la defensa de la justicia, la equidad, la paz y la democracia - principios orientadores de nuestra profesión- para avanzar en el pleno respeto a la vida y la dignidad humana; anhelo ampliamente acariciado por la sociedad colombiana.

**Dirección Ejecutiva
18 de setiembre 2020
San José, Costa Rica**